

La España inundable.

La catástrofe que se construye cada año.

1. La catástrofe anunciada.

Hay una escena que se repite cada otoño en el Mediterráneo español. El cielo se oscurece, la lluvia cae con una intensidad que parece imposible, los barrancos secos se convierten en ríos furiosos y el agua arrastra coches, muebles y vidas.

Los telediarios hablan de "episodio de lluvias torrenciales", los expertos mencionan la DANA, las autoridades piden prudencia. Y después, cuando el agua se retira, llegan las cifras: muertos, desaparecidos y daños millonarios. Y la pregunta que nadie responde: ¿por qué seguimos construyendo donde el agua volverá?

La DANA del 29 de octubre de 2024 fue la más mortífera de la historia de España. Dejó 229 fallecidos confirmados, entre ellos una bebé nonata de ocho meses, 2.641 heridos, 117.000 personas que recibieron atención médica y 303.295 afectados directos o indirectos.

Los daños económicos se cifraron en 17.800 millones de euros, a los que hay que sumar 12.000 millones más para reponer lo perdido y adaptar el territorio, lo que eleva la factura total a 29.000 millones.

Se destruyeron 66.000 locales comerciales, 15.969 viviendas, 115 centros educativos, 57 centros de salud y 144.000 vehículos. 564 kilómetros cuadrados de 75 municipios quedaron devastados.

Y sin embargo, un año después, se sigue construyendo en zonas inundables.

La DANA de 2024 no fue un desastre natural, fue un desastre construido y, lo que es peor, lo seguimos construyendo cada año.

2. La geografía del riesgo.

En España hay más de 26.000 kilómetros de zonas con alto riesgo de inundación. En ellas residen aproximadamente 2,7 millones de personas, de las cuales 700.000 viven en las áreas de mayor peligro. El 20% de las llanuras de inundación asociadas a zonas urbanas ya está ocupado por tejido urbano, comercial, industrial o de transporte. Y se siguen planificando nuevas construcciones en estos espacios.

Greenpeace lo denunció en su informe *DANAS, inundaciones y cambio climático*: "Se siguen planificando nuevas construcciones en estas zonas obviando todas las evidencias científicas y primando los intereses económicos". La Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Murcia son las regiones más expuestas. Pero el problema no es exclusivo del Mediterráneo; en Asturias, Galicia y el País Vasco también hay zonas de alto riesgo.

La paradoja es que las infraestructuras de defensa (presas, canalizaciones o esolleras) generan una falsa sensación de seguridad. Como advierte Greenpeace, "esconden un peligro real". La canalización de los ríos y la impermeabilización del suelo aceleran la escorrentía y multiplican la violencia del agua cuando llega.

3. La construcción en zonas inundables.

El caso más flagrante es el de la Comunidad Valenciana. Un año después de la DANA, las autoridades autonómicas y locales han diseñado lo que Amnistía Internacional denomina "urbanismo exprés"; una normativa que flexibiliza los procedimientos y permite continuar aprobando proyectos urbanísticos en los municipios afectados.

En Massanassa, por ejemplo, se ha autorizado un proyecto a solo 200 metros del Barranco del Poyo, el mismo que arrasó la localidad en 2024.

Amnistía Internacional ha documentado que "el derecho a la vivienda no estaba debidamente protegido por las autoridades antes de la DANA y continúa sin estarlo en la actualidad".

Las autoridades "han diseñado una normativa urbanística que ha permitido y sigue permitiendo la edificación en zonas inundables sin medidas eficaces de adaptación al cambio climático". Y no se ha aprobado la revisión del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), el instrumento clave para ordenar el territorio.

La Generalitat ha anunciado que ampliará las limitaciones en el marco de la revisión del PATRICOVA, pero el anuncio llega tarde y, mientras tanto, se siguen aprobando licencias. El "urbanismo exprés" es una forma de situar el beneficio privado por encima de la seguridad colectiva.

4. Las causas: cambio climático y mala planificación.

El cambio climático intensifica las lluvias torrenciales. El Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que la media global. Los estudios demuestran que el calentamiento global aumentó la intensidad de las lluvias de la DANA de Valencia hasta un 21% en seis horas y un 56% en las áreas con más de 180 milímetros. Lo que antes era excepcional se ha convertido en habitual.

Pero la catástrofe no se explica solo por el clima. La ocupación del territorio, la impermeabilización del suelo y el abandono de la gestión forestal multiplican el riesgo. El catedrático en Geografía Regional de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina lo resume con crudeza: "A golpe de desastres no se arreglan las cosas, en España hace falta planificar para evitar inundaciones". Y añade: "Ha habido muy poco respeto al cauce fluvial y, especialmente, al cauce sin agua" o "Tras la DANA habría que paralizar todos los planes urbanísticos".

Millán Millán, el meteorólogo que advirtió durante décadas de la "segunda pata" del cambio climático, lo explicó con claridad: la destrucción de la cubierta vegetal y la impermeabilización del suelo alteran el ciclo del agua y multiplican las lluvias torrenciales. "No necesitamos agua para tener plantas, necesitamos plantas para tener agua", decía. Pero su trabajo fue ignorado por la corriente climática dominante centrada en el aumento del CO₂ en la atmósfera.

5. La complicidad política.

Los ayuntamientos dependen de los ingresos urbanísticos, los promotores presionan, las administraciones autonómicas flexibilizan las normas, la ley no se cumple y, mientras tanto, las víctimas se cuentan por decenas.

La DANA de 2024 dejó 229 muertos en la Comunidad Valenciana, pero en Castilla-La Mancha también murieron siete personas sin apenas cobertura mediática.

La DANA de Cataluña de septiembre de 2026 provocó inundaciones en el Penedès, el Anoia y el Baix Llobregat, con nueve personas hospitalizadas y cientos de avisos a emergencias, aunque las causas siguen sin abordarse.

El problema no solo reside en la falta de inversión en prevención, es consecuencia también de la complicidad entre el poder político y el económico. Los planes urbanísticos se aprueban con informes favorables de organismos que dependen de las mismas administraciones que los promueven. La normativa se flexibiliza cuando hay que "reactivar la economía" y los ciudadanos quedan expuestos a un riesgo que no han elegido.

6. La invisibilidad mediática.

Los medios informan de la catástrofe, pero rara vez de sus causas. No se habla de la construcción en zonas inundables, ni de la falta de prevención, ni de la responsabilidad política. La DANA de Valencia fue un terremoto mediático, pero la de Castilla-La Mancha, con siete muertos, sigue rodeada de silencio. La invisibilidad es una forma de complicidad.

Greenpeace lo denuncia: "Dos años después de la DANA de Valencia, nadie hace nada por prevenir". La autocrítica del Gobierno sobre la ineficacia de la normativa de 2015, que reconoce que la construcción en zonas de riesgo no solo no ha cesado, sino que se ha incrementado, no se ha traducido en medidas efectivas.

7. El negocio de la reconstrucción.

La DANA generó un gran negocio: la reconstrucción de infraestructuras, viviendas y locales. El Consorcio de Compensación de Seguros recibió 251.677 solicitudes de indemnización, de las que el 95,4% procedían de la provincia de Valencia.

La reconstrucción no es neutral. Beneficia a los que ya tenían recursos y expulsa a los que no pueden pagar el nuevo precio del suelo. La destrucción no deprime el mercado inmobiliario, lo calienta. Un año después de la DANA, el precio de la vivienda en los municipios afectados aumentó un 16%, la demanda para comprar creció un 22% y la oferta de viviendas en venta cayó un 31,3%. La reconstrucción se convierte en una oportunidad para la especulación.

8. Alternativas: prevención y soluciones técnicas.

La prevención es posible. Existen soluciones técnicas que funcionan: sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS), pavimentos permeables, recuperación de cauces, reforestación de riberas o sistemas de alerta temprana.

La Generalitat ha anunciado la creación de una red de parques metropolitanos inundables que abarcará más de 3.900 hectáreas de suelo rústico en las riberas del Turia y del sistema Poyo-Saleta, con una inversión estimada de más de 150 millones de euros.

El Gobierno ha aprobado una nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, que obliga a las administraciones a identificar las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) y a zonificar el territorio por niveles de riesgo. El proyecto de real decreto de gestión de riesgos de inundación prohíbe construir nuevas viviendas en terrenos no urbanizados alcanzados por inundaciones fluviales cada 500 años y establece que las nuevas viviendas en zonas inundables se levanten al menos un metro por encima de la cota de agua, sin garajes subterráneos.

Pero estas medidas llegan tarde y se aplican con lentitud. La inversión necesaria en drenaje urbano para 2026-2035 se estima en más de 6.000 millones de euros. Y la voluntad política es escasa. Greenpeace exige una moratoria inmediata de nuevas licencias en suelos inundables, la retirada selectiva de construcciones vulnerables y planes de reubicación para las poblaciones en zonas de alto riesgo.

9. La vida sin inundaciones.

España no puede seguir construyendo donde el agua volverá, por la sencilla razón de que la seguridad no es un lujo, es un derecho y la prevención no es un gasto, sino una inversión. La justicia climática exige que las víctimas de las inundaciones no sean siempre las mismas: los más pobres, los que viven en los barrios más vulnerables, los que no pueden pagar una casa en una zona segura.

El cierre de este ensayo es político y reflexivo, en ese orden. Político, porque la solución no es técnica, sino política. Exige voluntad de regular, prohibir, invertir y priorizar la vida sobre el beneficio. Exige enfrentarse a los intereses urbanísticos, a los promotores y a los ayuntamientos que dependen de los ingresos del ladrillo. Exige cumplir la ley.

Y reflexivo, porque al final la cuestión no es solo cómo evitar la próxima inundación, sino qué sociedad queremos construir. Una sociedad que sigue edificando en cauces secos y barrancos olvidados es una sociedad que ha decidido mirar hacia otro lado, una sociedad que confía en que la próxima vez no será tan grave, una sociedad que ha aprendido a convivir con la catástrofe como si fuera un precio inevitable del progreso.

Pero la catástrofe no es inevitable, es el resultado de decisiones humanas sobre dónde construir, qué proteger y a quién escuchar. Decisiones que pueden tomarse de otra manera. La España inundable no es un destino, es una elección y, como toda elección, puede revertirse.

Y acabo este ensayo cuando AEMET ha emitido un Aviso de Nivel Rojo, que corresponde a un peligro extraordinario por lluvias torrenciales.